



EDITORIAL: PREOCUPANTE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD EN EL ECUADOR

Bertha García Gallegos*

Los temas incluidos en este Boletín muestran una preocupante situación de la Seguridad en Ecuador y, en general, en la región latinoamericana. Las problemáticas se internacionalizan rápidamente a estas alturas de la segunda década del siglo XXI, sin que exista, como contrapartida un cambio sustantivo que mejore las capacidades institucionales de defensa y de seguridad pública. Inquieta sobre todo la poca capacidad de elaborar agendas políticas que identifiquen claramente las amenazas y desafíos y difundan datos más agregados que admitan la elaboración de diagnósticos a mediano y largo plazo para sustentar la política pública.

Es verdad que el mundo globalizado atraviesa por dificultades de carácter político e institucional de graves proporciones además de los ajustes económicos. Las democracias más consolidadas atraviesan por crisis de representación como los Estados Unidos y la Unión Europea; pero en el primer caso se percibe una institucionalidad que permite alcanzar considerables grados de control y balance de poder; en cuanto a la Unión Europea a pesar de los remezones nacionalistas y populistas, es indudable que es un actor internacional reconocido cuyos Estados miembros ejercen influencia internacional con una política exterior y de seguridad común que ha avanzado en valores significativos. Esto no ocurre con nuestra región a pesar de que se han multiplicado los escenarios como la UNASUR y la CELAC.

En esta edición del Boletín se incluyen algunos de los temas internacionalizados más

preocupantes. En un momento en que se multiplican los conflictos armados no convencionales en el mundo, las capacidades de la defensa militar han sido reducidas al máximo y con excepción de Chile, el resto de países especialmente los sudamericanos han dedicado a sus fuerzas armadas a múltiples misiones que nada tienen que ver con la eficacia y eficiencia que se necesita para un futuro próximo lleno de incógnitas en esta materia. Venezuela demuestra los altos grados de politización de las fuerzas armadas y el modo en que toda una sociedad ha quedado atrapada en una situación vulnerable.

En nuestro propio país, los niveles de criminalidad asombran y la cronología de noticias del trimestre, ayuda a visibilizar problemáticas que directamente atentan contra la vida y los derechos humanos de las mujeres, los niños y los adolescentes. Femicidio, abuso de menores y pornografía infantil copan los registros de inseguridades. Ecuador, uno de los principales lugares del mundo en blanqueo de dinero. La Policía Nacional ha llegado en 2016 a un récord en las incautaciones de drogas, principalmente cocaína, y ha desbaratado 100 organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes. Es de esperar que con el nuevo gobierno se revisen las políticas y procedimientos en bien del país y se amplíe la mirada estratégica en materia de Seguridad y Defensa con Derechos Humanos.

* Bertha García Gallegos, Dra. PhD en Ciencias Sociales; profesora principal de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. PUCE.

- 01 EDITORIAL
Preocupante internacionalización de la problemática de seguridad en el Ecuador
Bertha García

- 02 Panorama de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica: tendencias hacia el futuro
José Manuel Ugarte

- 06 Impactos de la crisis de Venezuela en Colombia
Evan Ellis

- 08 Drogas y encarcelamiento, una de las principales causas de la crisis carcelaria en América Latina
Cristina Chuquimarca M.

- 10 ENTREVISTA
El fenómeno del femicidio y su tipo penal
David Arcentales I.

- 12 CRONOLOGÍA
Enero - Abril 2017

PANORAMA DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LATINOAMÉRICA: TENDENCIAS HACIA EL FUTURO

José Manuel Ugarte*

Al finalizar la segunda década del siglo y en una región con claros indicios de cambio, continúan advirtiéndose, con las excepciones de Argentina y Chile, limitaciones en materia de control civil. Brasil constituye una creciente incógnita, mientras que en la dividida Venezuela la fuerza armada alcanza el nivel de cogobierno, manteniéndose tales limitaciones fuertes en otros países andinos y en los centroamericanos que poseen fuerzas armadas. En materia de organización, equipamiento y alistamiento, Chile exhibe los niveles más altos de la región, Brasil procura un reequipamiento a tono con su elevado gasto militar, mientras que Argentina continúa exhibiendo organización y estructura de personal inadecuadas, obsolescencia en equipamiento y bajos niveles de alistamiento. Se mantiene la tendencia en la región al creciente involucramiento de las fuerzas armadas en seguridad pública, especialmente en México, Perú y Colombia, con las claras excepciones de Argentina y Chile. Los cambios políticos, económicos y sociales que imperan en la región, plantean la incógnita sobre sus posibles efectos en las fuerzas armadas. Este artículo explora la relación entre polifuncionalidad, control civil y gasto militar que inciden en los diversos grados de eficiencia y eficacia de las organizaciones militares para su función principal, la defensa.

1. Polifuncionalidad de las fuerzas armadas latinoamericanas.

Con las únicas excepciones de Argentina –aunque, durante las postrimerías del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se encomendó al Ejército la realización de patrullajes fronterizos en apoyo de la lucha contra el narcotráfico– y Chile, los restantes países latinoamericanos tienen fuerzas

armadas polifuncionales, que suman, además de la defensa, otras funciones con diversas características según los países, como de seguridad interior, defensa de la Constitución, garantía de los poderes constitucionales, cooperación con el desarrollo del país, acción cívica, y control de sectores burocráticos de interés, entre otras. Particularmente cabe destacar la cooperación en el desarrollo nacional, que suele incluir la dedicación a diversas actividades empresarias, en algunos casos totalmente ajenas a la defensa.

Aunque formalmente las doctrinas de seguridad nacional dejaron de ser aplicadas en la mayoría de los países latinoamericanos, muchos de sus efectos han perdurado en la organización, doctrina, equipamiento y despliegue de las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Como puede advertirse, además de la defensa, la función que más frecuentemente ejercen las Fuerzas Armadas latinoamericanas es la de seguridad interior, con una extensión que varía del apoyo con servicios y elementos que en tiempos ordinarios excluyen los de combate e inteligencia, como en el caso de Argentina, el ejercicio de la policía en los ámbitos naval y aeronáutico en Chile, hasta las facultades que ejercen en Guatemala y México, donde están facultados en similar medida para actuar en defensa nacional y en seguridad interior.

En Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras, Nicaragua, y Uruguay, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela entre las funciones de sus Fuerzas Armadas se encuentran las relativas a la contribución con el desarrollo del país, lo que en diversos países ha dado lugar a la incursión por parte de

las Fuerzas Armadas en actividades empresarias, en diversos casos no vinculadas a la defensa. Argentina, Honduras y Nicaragua incluyen expresamente entre las misiones y funciones de sus fuerzas armadas la participación en misiones internacionales de paz. Argentina y Chile han puesto a disposición de la Organización de las Naciones Unidas, la Fuerza de Paz Conjunta Combinada Cruz del Sur. La totalidad de las Fuerzas Armadas de la región participan en acciones, tanto preventivas como de respuesta, mitigación y reconstrucción en caso de desastres naturales, figure o no tal actividad en sus respectivas misiones y funciones.

El grado de plurifuncionalidad de las fuerzas armadas latinoamericanas tiende a aumentar en razón del incremento de la criminalidad y del deseo presente en dichas Fuerzas de alcanzar mayor visibilidad por parte de la población y mayor presupuesto. Tal circunstancia no deja de tener consecuencias. En su clásica obra *El Soldado y el Estado*, Samuel Huntington analizó las características de las estructuras de defensa y de las Fuerzas Armadas en diversos países, en relación a las relaciones de poder entre civiles –fundamentalmente, la conducción política de la defensa– y los militares, para la materialización –o no– por parte de los primeros, del control civil, fundamentalmente, la capacidad de las autoridades políticas de conducir efectivamente la defensa y de obtener la obediencia de los militares. En dicho análisis, Huntington destacó también el ámbito relativo, es decir, el ámbito de competencia de las fuerzas armadas, señalando que cuanto más amplio fuera, mayor sería la influencia de las Fuerzas Armadas sobre el poder político. Este es un punto fundamental

en Latinoamérica, región en la cual el amplio ámbito de competencia de las Fuerzas Armadas ha constituido fuente de influencia política para éstas y, paralelamente, de mayores dificultades para el poder político en cuanto al ejercicio de la conducción.

Del alto grado de polifuncionalidad de las Fuerzas Armadas latinoamericanas se deriva, un significativo grado de influencia política en sus países. Y una mayor dificultad para alcanzar eficacia y eficiencia en su ámbito específico, también de su dedicación a múltiples actividades.

2. El gasto en defensa en Latinoamérica en relación a las capacidades militares

Un examen de la evolución del gasto en defensa en Latinoamérica, en el período 1988-2015, nos permite arribar a algunas conclusiones interesantes. (ver cuadro N°1)

	1988	1990	1995	2000	2005	2010	2012	2013	2014	2015
Argentina	3642	2010	1890	1632	1526	2713	3443	4218	4979	5342
Bolivia	208	307	272	319	347	427	559	597	626	535
Brasil	19792	16487	19334	21298	22421	32257	31846	32020	32660	31954
Chile	2420	2106	2541	3094	4030	4770	4970	5139	5127	5071
Colombia	2496	2661	4726	6076	8009	11070	11029	12009	11846	12945
Ecuador	548	546	822	680	1387	2447	2744	2756	2904	2592
México	2524	2777	3643	4340	4287	6517	6799	7466	7833	8976
Paraguay	156	224	261	233	193	278	317	363	401	522
Perú	3208	1861	2247	1611	1742	2214	2162	2345	2907	3303
Uruguay	995	1069	858	930	745	939	894	935	1025	1044
Venezuela	6127	5130	5007	4922	6814	4811	4495	7730	5577	2032

Cuadro N° 1. Fuente: SIPRI Military Expenditures Database, en millones de dólares constantes (2014) actualizado hasta 2015

Comparado el anterior cuadro con similar evolución de países de otras regiones, con desarrollo militar que podríamos calificar como medio, y con un gasto en defensa razonablemente similar al de los principales países lati-

noamericanos: Bélgica, Canadá y España, vemos que mientras la totalidad de los países latinoamericanos ha incrementado significativamente su gasto en defensa en dólares constantes, los países de otras regiones tomados como com-

paración lo han disminuido. Ello así, pese a tratarse de países integrantes de la OTAN-NATO y que poseen significativas capacidades militares.

	1988	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014
Bélgica	8590	8297	6104	6096	6214	5675	5415	5244	5192	4953
Canadá	19352	19236	16278	14623	16647	19332	19004	17567	17854	17210
España	19444	19618	18250	20860	20537	21138	19721	17205	17051	16929

Cuadro N° 2. Fuente: SIPRI Military Expenditures Database, en millones de dólares constantes (2011) actualizado hasta 2015

Agregaremos a esta comparación, la evolución en la materia, con la misma

fuentes, de las cinco potencias integrantes del Consejo de Seguridad: China,

Estados Unidos, la Federación Rusa, Francia, y el Reino Unido.

	1988	1990	1995	2000	2005	2010	2012	2013	2014	2015
China	----	22025	26213	43230	79809	144383	169321	182930	199651	214485
EEUU	86731	554742	433220	414768	610776	757992	706082	650081	609914	595472
Rusia	343617	269545	31342	28838	43010	60940	75364	79030	84697	91081
Francia	69901	69538	64047	60897	64235	65322	62844	62686	63614	60747
U.K.	64010	64666	53183	52766	63922	69192	63446	60766	59183	59730

Cuadro N° 3. Fuente: SIPRI Military Expenditures Database, en millones de dólares constantes (2011) actualizado hasta 2015

Podemos advertir que las tres mayores potencias occidentales, Estados Unidos (hasta 2014) Francia y el Reino Unido, han mantenido en dólares constantes aproximadamente el mismo gasto en defensa que realizaban en 1988, mientras que China lo ha incrementado muy

significativamente, acorde con el rol de potencia mundial que busca, y por su parte la Federación Rusa, aunque con un gasto muy inferior al que realizaba la Unión Soviética, ha incrementado muy significativamente su gasto, acorde con su manifiesto propósito de incrementar

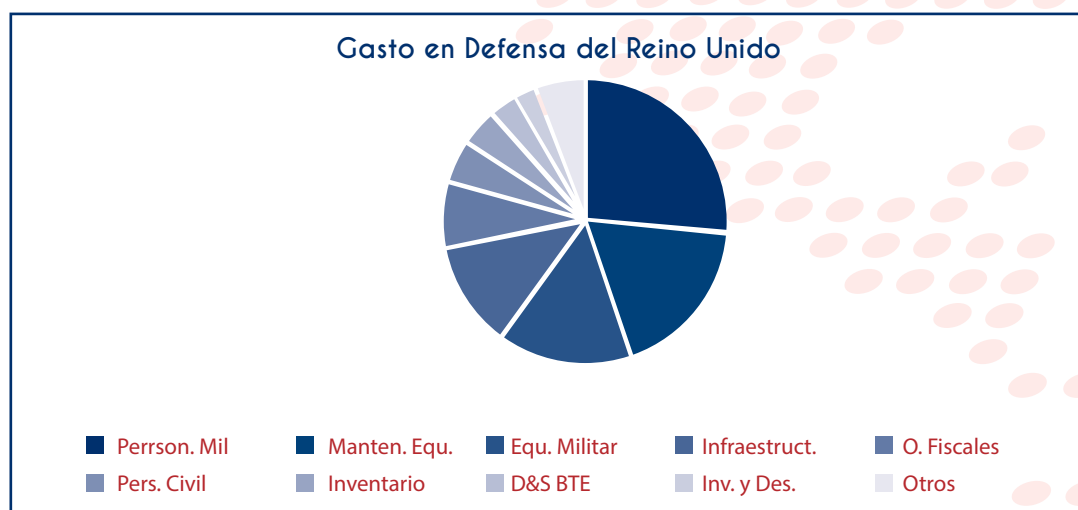
su poder militar para recuperar territorios que poseyera su poderosa antecesora.

Salvo circunstancias realmente especiales como las que registran, por razones muy diversas, China y Rusia

—respectivamente, el surgimiento y el resurgimiento de potencias militares no hallamos en el mundo occidental incrementos similares a los que, en dólares constantes, presentan algunos países latinoamericanos, como son los casos de Brasil, Chile, México, Colombia, y la propia Argentina, a pesar de que en este último caso, un significativo incremento coexiste con capacidades militares reducidas hasta un grado cercano a la desaparición.

Mientras entre 1988 y 2015 Brasil en dólares constantes incrementó su gasto en defensa entre 1988 y 2015 en el 61,4%, Chile lo hizo en el 109,5%, Bolivia en el 157, 21%, Colombia en el 418,63%, México en el 255,62%, Ecuador en el 372,99%, Paraguay en el 234%, Argentina en el 46,68%, los restantes países de la región mantuvieron un gasto razonablemente estable, salvo Venezuela que experimentó una disminución, probablemente atribuible a las dificultades económicas por las cuales atraviesa el país.

Una circunstancia de interés para caracterizar la calidad del gasto militar en la región —entendiendo como tal, la aptitud de dicho gasto para generar auténticas capacidades de defensa— es la proporción entre gastos en personal, gastos de funcionamiento e inversiones en el presupuesto de defensa. Tomemos como caso al Reino Unido, en la publicación del Ministerio de Defensa inglés *Finance and economics annual statistical bulletin: departmental resources 2016*¹ se detalla la composición del gasto en defensa de ese país en 2015.



D&S BTE es una agencia ejecutiva de gestión comercial de adquisición de equipamiento y apoyo— el gasto en personal y civil ascendió a un 26,5% en personal militar y 4,8% en personal civil, mientras que el gasto en equipamiento específicamente militar fue de 15,1%, en apoyo al equipamiento 18,4% y en infraestructura 11,9%. Esta referencia a un país de primer nivel en materia de defensa nos sirve para comparar relativamente lo que pasa en la región. En el Atlas Comparativo de la Defensa Nacional y el Caribe, 2016 publicado por la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL) obra un cuadro comparativo relativo a la proporción de gastos en personal e inversiones de los presupuestos de defensa de la región. Es interesante y elocuente la proporción representada por los gastos en personal —remuneraciones,

cargas sociales, pensiones— en los presupuestos de defensa de diversos países de la región:

Cabe advertir inicialmente los bajos porcentajes que representa la inversión en defensa en la región, con la excepción de Chile, caracterizado por poseer el mejor equipamiento militar de Latinoamérica, y Brasil en algunos años. Las Fuerzas Armadas de Chile han actualizado de manera significativa su equipamiento a través de la adquisición, para su Fuerza Aérea, de diez aviones nuevos F-16 C y D Block 50, y de 36 F-16 AM y BM Fighting Falcon usados, al Reino de los Países Bajos², contando con misiles para combate aéreo de alcance corto y medio, misiles aire-tierra Maverick y bombas guiadas por infrarrojo. Estos aviones se unen a los 12 más antiguos F-5 E y F modernizados por ENAER, para conformar la fuerza aérea más po-

derosa de Latinoamérica. En lo relativo a la Armada, se destaca la adquisición de dos submarinos diésel Scorpène de fabricación francesa, con capacidad de lanzamiento de misiles antibuque. El Ejército, cuenta con los blindados de mayor poder de Latinoamérica, los 130 tanques Leopard II A-4, cuya artillería de 120mm, blindaje y medios ópticos y electrónicos lo posicionan en un primer nivel mundial, y que unidos a los 114 Leopard I modernizados, también destacan al país en un primer nivel en el ámbito terrestre. No solamente ha adquirido estos equipos, sino también la munición que posibilita su empleo.

Venezuela también ha adquirido en fecha relativamente reciente equipamiento moderno, aunque la crisis económica en que se encuentra sumergido el país ha disminuido las disponibilidades para estas adquisiciones. La adquisición en

Personal e inversión (en %)

PAÍS	2006		2008		2010		2012		2014		2016	
	P	I	P	I	P	I	P	I	P	I	P	I
Argentina	77,1	2,4	78,7	3,1	75,4	3,1	76,4	3,9	78,4	2,3	80,8	2,4
Bolivia	69,9	3,8	62,1	5,2	62,2	5,8	63,6	3,7	63,0	5,0	66,1	3,0
Brasil	74,8	6,3	70,3	10,9	71,6	14,0	70,0	14,0	67,6	12,6	74,7	9,4
Chile	55,3	25,8	50,5	31,6	58,4	24,0	59,6	21,9	60,4	19,7	67,1	11,7
Colombia	48,9	12,7	43,9	25,5	48,8	14,0	49,3	11,3	49,8	11,9	56,2	5,5
Ecuador	73,0	5,3	78,6	1,8	74,4	15,3	81,4	7,2	75,9	8,7	83,7	6,7
El Salvador	75,0	7,7	72,6	7,4	72,6	3,0	75,0	2,4	77,2	1,5	79,4	1,5
Guatemala	51,9	11,6	55,8	2,3	61,6	1,4	62,7	4,8	56,3	13,2	67,1	7,9
Honduras	72,1	0,7	71,5	4,9	77,0	0,6	84,1	1,6	69,6	3,1	67,0	2,6
México	79,5	0,8	78,7	3,0	75,2	5,3	74,3	4,8	70,9	9,8	65,7	14,2
Nicaragua	58,7	3,4	57,7	2,6	62,6	2,4	44,6	25,3	42,2	22,6	65,4	4,6
Paraguay	84,8	3,7	84,0	5,7	81,8	7,1	69,7	18,3	82,3	7,4	83,9	5,6
Perú	51,5	3,3	47,6	7,9	48,5	14,9	48,4	24,9	51,8	23,3	56,3	24,5
República Dominicana	76,0	3,8	73,7	8,7	80,7	4,6	78,7	1,6	80,0	1,2	79,5	1,5
Uruguay	73,6	5,1	73,8	5,4	79,7	5,8	80,0	3,3	81,0	3,1	85,9	1,7
Venezuela	75,2	13,4	76,7	2,3	82,5	1,6	48,6	40,9	49,4	34,3	69,1	4,3

Fuente: Atlas Comparativo de la Defensa Nacional y el Caribe, 2016

2009 de 92 tanques T-72 B1, versión modernizada y con blindaje reforzado de un clásico blindado ruso, ha reforzado capacidades blindadas ya incrementadas en 1990 a través de la adquisición del tanque ligero inglés Scorpion 90, de los que el país posee 78, habiendo iniciado asimismo la repotenciación de los 81 tanques AMX-30V que posee, con participación de Israel y de España.³ La Fuerza aérea se destaca por la Adquisición del Su-30MKV, cazabombardero interceptor de largo alcance de origen ruso dotado de moderno armamento y capacidad de utilización de armamento inteligente aire-tierra, contando Venezuela con 23 de estos aparatos.

En los últimos años, Brasil impulsó importantes proyectos de reequipamiento, destacándose la adquisición de 36 unidades del cazabombardero Saab Gripen NG con significativa transferencia de tecnología y fabricación en Brasil, previéndose la entrega de los primeros aparatos en 2019.⁴ Brasil ha optado por la autonomía y la transferencia de tecnología, asegurándose la posibilidad de construcción y desarrollo del avión en el futuro, así como costos de operación sensiblemente menores a los de otras posibles alternativas. En materia de equipamientos navales, se destaca el programa PROSUB, consistente en la construcción en astilleros franceses y

brasileños, con transferencia de tecnología por parte de Francia, de cuatro submarinos diésel Scorpène con capacidad de lanzamiento de misiles antibuque, y de un submarino nuclear.⁵

Colombia cuenta con el segundo presupuesto de defensa de la región, y sus Fuerzas Armadas son también numéricamente las segundas, seguidas por México, quien posee el tercer presupuesto de defensa de la región. Tanto Colombia como México tienen sus Fuerzas Armadas configuradas prioritariamente para la seguridad interna y la contrainsurgencia y por esa razón, no poseen medios materiales proporcionales a sus dimensiones numéricas; carecen de tanques, y poseen fuerzas aéreas constituidas por aviones de combate relativamente antiguos y en número limitado, y fuerzas navales formadas por un número limitado de buques.

Ecuador es un caso interesante, por constituir un país pequeño, que ha debido enfrentarse militarmente con su vecino Perú, que lo supera ampliamente en territorio, población, y producto bruto interno. Por ello, ha desarrollado Fuerzas Armadas capaces, bien que en número relativamente pequeño, pero que incluyen dos escuadrones de aviones de combate y una flota de guerra que incluye submarinos, fragatas y cor-

betas, todo ello mantenido con un presupuesto algo inferior a 2.000 millones de dólares.

Tras la restauración de la democracia en Argentina, el 10 de diciembre de 1983, el nuevo gobierno civil acometió la reducción del presupuesto de defensa que ascendía al 4,2% del P.B.I., habiendo alcanzado su pico en 1981 con el 4,7% del P.B.I. -cifra inviable para un país empobrecido y fuertemente endeudado- para llevarlo a los niveles históricos de tiempos de paz. Así, en dos etapas, entre 1984 y 1985, se redujo a un 2,4% del P.B.I., porcentaje similar a los vigentes entre 1970 y 1974, y superior al porcentaje que representaba el gasto de defensa de Brasil respecto de su P.B.I.⁶

En Conclusión: No obstante los indicados incrementos en el gasto en defensa en términos reales, producidos en la mayoría de los países de la región, no parecen haberse desarrollado significativas capacidades militares, con la excepción de Chile, que posee los medios materiales más modernos, y en menor grado Brasil, que evidencia, su aspiración de desarrollarse militarmente, aunque hasta el momento las capacidades no son proporcionales a la magnitud del gasto que realiza.

* Doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de Buenos Aires. Miembro de CLACSO. Docente de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho.

1. Ministry of Defence, London, 2017, disponible en https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/580469/Commentary_relating_to_Finance___Economics_Annual_Statistical_Bulletin___Departmental_Resources_January_2017.pdf, pág. 8, Defence Expenditure by

Commodity Blockj.

2. Entre muchas fuentes, V. Infodefensa.com, nota Fidae 2016, <http://www.infodefensa.com/latam/2016/03/31/noticia-programas-proyectos-fuerza-aerea-chile.html> (acc. 2-2-2017).

3. V. Infodefensa, 20/07/2016, disponible en <http://www.infodefensa.com/latam/2016/07/20/noticia-ejercito-venezuela-adelanta-repotenciacion-tanques-amx30v.html> (acc. 02-02-2017).

4. Airway, UOL Brasil, Produção do Gripen NG é iniciada no Brasil, Thiago Vinholes, 23 de noviembre

de 2016. En <http://airway.uol.com.br/producao-do-gripen-ng-e-iniciada-no-brasil/> (acc. 07-03-2017)a

5. Military Balance 2017, Institute for International Strategic Studies, London., pág. 372.

6. Adalberto Rodríguez Giavarini, 1990 Planeamiento de Defensa, Fuerzas Armadas y Recursos Económicos, en, Gustavo Adolfo Druetta, Eduardo E. Estévez, Ernesto López y José Enrique Miguens, Defensa y Democracia – Un debate entre civiles y militares, Editorial Puntosur, Buenos Aires, 1990,

IMPACTOS DE LA CRISIS DE VENEZUELA EN COLOMBIA

Evan Ellis, con redacción DSD-PUCE*

Fronteras calientes

Un panorama insuficientemente analizado es el que presenta la seguridad fronteriza de Colombia y Venezuela, a medida que se agrava la crisis interna que enfrenta a las fuerzas gubernamentales con los manifestantes civiles, y se desbordan todo tipo de problemas especialmente los de seguridad. Desde Colombia se puede tener una perspectiva diferente de la mirada casual con la que la problemática política venezolana es observada desde otras partes del continente. Un reciente artículo del analista Evan Ellis difundido en abril de este año, suscita comentarios que tratan de posicionarse en la perspectiva cercana a los acontecimientos, tal como lo hace el autor.

Para explicar el contexto, Ellis hace referencia a los fuertes lazos que unían a estos dos países durante la época de la Independencia, cuando compartieron el proyecto liberador de Simón Bolívar. Luego de un primer intento fracasado en Venezuela, Bolívar logró derrotar a las fuerzas españolas en 1819 en la batalla de Boyacá. Entre 1819 a 1831, las dos naciones fueron parte de la Gran Colombia, cuya herencia se refleja hoy en día en la similitud de sus banderas nacionales. A lo largo de su historia, han compartido un alto nivel de intercambio económico e inter-migración; muchos colombianos buscaron refugio u oportunidades económicas en Venezuela cuando ésta tenía una economía boyante por sus recursos petroleros. Líderes y miembros de las dos principales organizaciones insurgentes que han

luchado contra el Estado colombiano, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también se refugiaron en el interior de Venezuela.

A medida que la problemática económica y política en Venezuela se profundiza, los analistas del sector seguridad colombiano han manifestado dos preocupaciones principales. La primera gira sobre el temor a una posible oleada desestabilizadora de refugiados de Venezuela y la violencia criminal en zonas de Colombia, actualmente en proceso de desmovilización armada, agitadas por la presencia de bandas criminales y otros actores aún no identificados. La segunda es la posibilidad de una agresión militar de Venezuela en el intento de su gobierno por conseguir estrategias de distracción, para conjugar el asedio de fuerzas opositoras. Se estima que unas 150.000 personas han dejado Venezuela en el último año, en su mayoría impulsados por una grave escasez de alimentos, medicinas y otras necesidades básicas, agravadas por la violencia criminal prácticamente sin control que ha hecho de Caracas, la ciudad más peligrosa de América Latina.

Muchos de los que han huido de Venezuela, irónicamente, son colombianos que habían emigrado allí décadas atrás para escapar de la guerra civil de Colombia cuando Venezuela era un país relativamente pacífico y próspero. A medida que la crisis ha empeorado, los nacidos en Venezuela han comenzado a huir también. Algunos han huido a través del Caribe a las islas cercanas, como Aruba, Curazao y Trinidad y To-

bago. Su éxodo ha conllevado una serie de efectos que incluyen la criminalidad expandida e incluso la piratería frente a la costa de Venezuela.

La frontera entre Colombia y Venezuela ha sido siempre un área de intercambio significativo de personas que mantienen una mezcla cultural representativa de las dos naciones. Pero a medida que la crisis se agravó, también ha crecido el paso a Colombia de diversos grupos conflictivos asociados a bandas criminales (el Golfo clan, pelusos y puntilleros) que tratan de extorsionar a los “compradores” por su paso seguro. Una porción difícil de determinar, pero cada vez mayor de las personas que cruzan la frontera lo hacen para permanecer en Colombia.

Los caminos a Colombia desde la capital venezolana, Caracas (y otras ciudades importantes, como Puerto Cabello, Maracay, Valencia, Mérida y Barinas), tienden a canalizar los refugiados hacia Cúcuta, la ciudad fronteriza de Colombia en el Departamento de Santander, actualmente punto focal importante de actividades delictivas asociadas al tráfico de cocaína con presencia de los grupos mencionados. Las luchas territoriales entre esos grupos se agravan por la retirada de las FARC de esa zona, bajo los términos del acuerdo de paz con el gobierno. La afluencia de decenas de miles de refugiados desesperados proporciona a los grupos criminales un flujo constante de víctimas y potenciales reclutas.

Flujos migratorios

De los que cruzan actualmente a Colombia desde Venezuela, un número importante tienen ciudadanía colombiana por haber emigrado a Venezuela para escapar de la violencia económica en Colombia. Muchos de ellos pasan la región fronteriza, pero van a otras partes del interior del país donde conservan parientes u otros contactos. Los refugiados sin ciudadanía colombiana demuestran patrones de inmigración diferentes. Algunos van para trabajos eventuales durante unos días o semanas y obtener divisas que los ayude a sostener la vida en Venezuela. Otros buscan permanecer en Colombia por un período más largo, hasta que las condiciones políticas y económicas cambien. De los que provienen de la costa venezolana, muchos se trasladan al suroeste a lo largo de la carretera principal de la nación a través de los estados Lara, Trujillo, Mérida y Táchira. Entrando por Cúcuta, se mueven hacia la propia costa caribeña de Colombia, que tiene condiciones similares a sus regiones de origen en Venezuela, como las ciudades colombianas de Barranquilla, Santa Marta y Sincelejo, donde se percibe un aumento significativo del número de venezolanos que se han instalado allí.

Un menor número de venezolanos han optado por emigrar desde Barinas, hacia más al sur para instalarse en el propio corazón rural de Colombia. Una parte significativa busca oportunidades en la capital de Colombia, Bogotá y otras ciudades importantes. Sin que existan cifras confirmadas se estima que unas 300.000 personas se han instalado en Bogotá y su presencia es notoria en barrios capitalinos como los Cedritos. Mientras que Medellín es otra ciudad que experimenta una explosión similar de venezolanos.

Percepciones de inseguridad por parte del Estado colombiano: armas, retórica belicista y algo más...

El autor observa que, a medida que se torna más difícil para los refugiados el integrarse en las economías fronterizas saturadas, el gobierno de Colombia estará bajo una mayor presión. Res-

ponder a las necesidades de su propia población y a la vez de los refugiados se ha convertido en un desafío para las organizaciones de ayuda internacional, como la Cruz Roja, que buscan entrar en la zona para proporcionar asistencia. Uno de los problemas más urgentes es dar protección a los refugiados asediados por las entidades criminales que se aprovecha de su vulnerabilidad para extorsionarlos o incluirlos en sus actividades ilícitas.

Pero más allá de esta situación, los estratagemas de seguridad de Colombia, están preocupados por el significativo incremento del flujo de armas desde Venezuela, que llega a manos de grupos armados no estatales en Colombia. Se estima que unos 100.000 fusiles vendidos por Rusia a Venezuela, han pasado al mercado negro por parte de empobrecidos miembros de las milicias armadas para suplir sus necesidades. Sin embargo, una preocupación de mayor nivel tiene que ver con la posibilidad de que una eventual división dentro de las fuerzas armadas de Venezuela, lleve al presidente Maduro a provocar un conflicto fronterizo para unirlos contra una amenaza externa fabricada, lo que reduciría temporalmente las presiones internas en el régimen.

De hecho, muchos colombianos interpretan de este modo la incursión de soldados venezolanos en territorio de Colombia en marzo de 2017, que cruzaron el río Arauca, como para tratar de provocar una respuesta de Colombia. Sus temores acerca de las intenciones de Venezuela se refuerzan por una lista de acciones emprendidas por el régimen venezolano, como las del ejercicio militar "Guaicaipuro" (2008) un simulacro de invasión venezolana a la región de la Guajira de Colombia, asociado con una demanda territorial pendiente desde la época de la Independencia. Existen otras preocupaciones como las relacionadas con las adquisiciones de armamento por parte de Venezuela a Rusia y China en los últimos años, incluyendo helicópteros de combate, tanques, vehículos blindados, lanzacohetes múltiples, y otros activos, así como un ejercicio de marcha militar 2017 llama-

da "movilización nacional por Venezuela" (Plan Zamora) junto con la retórica cada vez más belicosa de Maduro contra Colombia al denominarlo como un "estado fallido".

Cierto es que las fuerzas armadas de Venezuela no tienen las dimensiones de sus homólogos colombianos en cuanto a formación, logística y experiencia de combate; pero el gran número de carros de combate y otros vehículos blindados, helicópteros de ataque y Su-30 de Venezuela representan una amenaza no trivial para las fuerzas armadas de Colombia, cuya estructura está más orientada hacia las misiones de defensa y seguridad interna. Aunque la capacidad de Venezuela para sostener logísticamente sus fuerzas probablemente colapsaría en cuestión de días, sus tanques de fabricación rusa podrían potencialmente propinar severos daños a la defensa colombiana en La Guajira, así como sus Su-30 podrían enfilarse atacar objetivos en Bogotá, Medellín y otros lugares de Colombia en cuestión de minutos. Existe el temor de que los ataques de las fuerzas convencionales fueran acompañados del apoyo de las milicias venezolanas, o las fuerzas especiales cubanas "avispa negra" que puede haber infiltrado agentes en Colombia confundidos con los refugiados venezolanos, con el objetivo de incitar a la violencia en la zona como parte de una campaña psicológica dirigida a la comunidad internacional, buscando un apoyo moral. Al respecto, el gobierno colombiano se ha demostrado medido frente a las acciones y retórica de Maduro y ha tratado de mantenerse dentro de la tónica de la comunidad internacional.

* Evan Ellis, analista de temas de seguridad con especial énfasis en las relaciones económicas, políticas y militares entre América latina, China y otros actores internacionales incluyendo la India, Rusia, e Irán. Profesor asociado de estudios latinoamericanos en el U.S. Army War College Strategic Studies Institute (SSI). El artículo original, difundido en Latin America Goes Global, de abril 24, tiene como título: The Impact of the collapse of Venezuela on Colombia.

DROGAS Y ENCARCELAMIENTO, UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE LA CRISIS CARCELARIA EN AMÉRICA LATINA

Cristina Chuquimarca M.*

Desde hace algunos años, América Latina presenta una grave crisis carcelaria con fuertes implicaciones económicas, políticas y sociales. La problemática ha resurgido como tema de debate debido a los amotinamientos suscitados en Brasil, que han puesto sobre el tapete el problema carcelario y los desafíos que conlleva (Muggah & Szabó de Carvalho, 2017)¹. Parte de la razón por la que la violencia en las cárceles es tan común en Brasil y otros países, son las condiciones bárbaras de las cárceles. A esto se suma el aumento desmesurado del poder punitivo de los estados, para resolver diversos problemas sociales, entre ellos el consumo de droga (Chaparro, Pérez, & Youngers, 2017, pág.

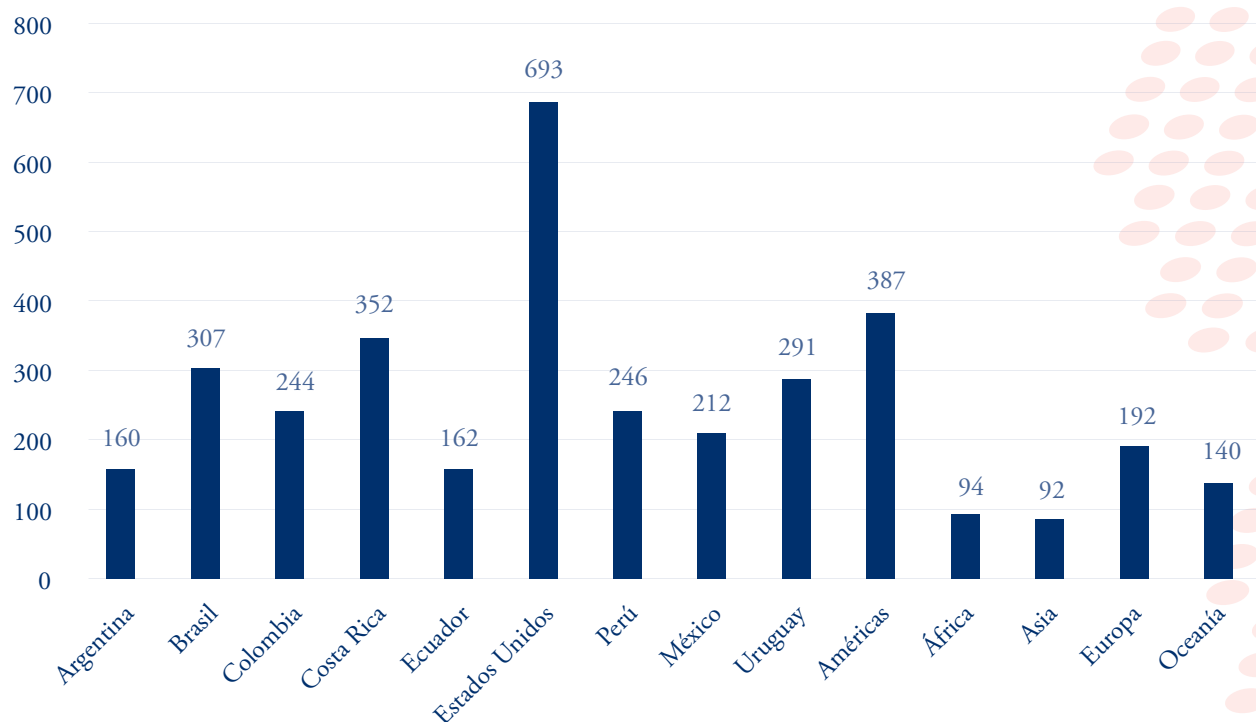
9). Tal como señala el informe regional 2017 del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, “como respuesta a la inseguridad y violencia en la región [los estados], frecuentemente han recurrido al derecho penal como principal solución” (2017, pág. 11); entre las estrategias utilizadas para este fin están: 1) restricción a la libertad condicional; 2) aumento de causales para prisión preventiva; 3) aumento de las penas en ciertos delitos como violación u homicidio.

Todo lo anterior, ha ocasionado, según el mismo informe, un sistemático aumento de la población penitenciaria (2017, pág. 11), lo que unido a la falta de políticas adecuadas y gestión de-

ficiente de los centros de privación de libertad, han dado como consecuencia: sobrepoblación carcelaria, escasez de recursos y condiciones de extrema violencia. “Teniendo en cuenta el tamaño poblacional, el continente americano tiene la tasa de encarcelamiento más grande del mundo” (Chaparro, Pérez, & Youngers, 2017), así lo refleja el gráfico No.1 respecto al número de personas privadas de libertad por cada cien mil habitantes; además, de que es el continente donde más rápidamente ha crecido dicha población en siglo XXI.

Aunque Estados Unidos tiene la tasa más alta de personas privadas de libertad, el informe sostiene que desde el

Gráfico 1. Tasa de encarcelamiento por cada 100 mil habitantes en los países seleccionados, en comparación con el resto del mundo. Datos más recientes disponibles en el World Prison Brief del ICPS



Fuente: (Coyle, Fair, Jacobson & Walmsley, 2016, citado en Chaparro, Pérez, & Youngers, 2017)

2008, su tasa se ha mantenido (2017), no así en otros países latinoamericanos donde la tasa crece constantemente, superando los niveles de otros continentes.

La cárcel como solución a la problemática de drogas

Según el informe antes mencionado, la respuesta penal para el tratamiento del tema de drogas es una constante que se efectiviza en las distintas fases de criminalización, esto es: en la definición legislativa de los delitos, en el proceso investigativo y en la ejecución de la pena. Respecto de la primera fase, al momento de construir leyes y tipologías penales se debe tomar en cuenta determinadas garantías que se desprenden de: 1) los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos y 2) las normas Constitucionales. Sin embargo, análisis jurídicos señalan que, en varios países de América se han establecido penas desproporcionadas, donde “el tráfico de drogas, por ejemplo, ha llegado a ser sancionado con penas más altas que las impuestas a los delitos como el homicidio o la violación sexual” sin diferencias claras entre tráfico a gran escala, microtráfico, consumo problemático. (Uprimny et al, 2002, citado en Chaparro, Pérez, & Youngers, 2017).

Sobre la segunda fase (criminalización en la etapa judicial), la tendencia regional en tema de drogas es la “inflexibilidad”, “confusión de diversas conductas en un mismo tipo penal y la severidad” (Chaparro, Pérez, & Youngers, 2017). Los operadores judiciales suelen ejecutar las disposiciones dando primacía a la prisión preventiva. Así lo evidencian las estadísticas, que afirman que, el uso desproporcionado del derecho penal ha llevado a que en los centros de privación de libertad existan “más personas encarceladas preventivamente, que aquellas que han sido condenadas” (Chaparro, Pérez, & Youngers, 2017, pág. 14).

Respecto a este mismo tema, el informe señala que, en aras de combatir el

narcotráfico o crimen organizado, en algunos países se llegaron a mermar las garantías procesales con prácticas como por ejemplo: “la justicia sin rostro”², el “régimen penal especial” de México³ o la declaratoria de emergencia en el sector Seguridad.

En lo que tiene que ver con la fase ejecutoria de la pena, a las personas condenadas por delitos de droga “se les niega con frecuencia el acceso a penas alternativas a la prisión (...) En Brasil [por ejemplo] (...) por tratarse de ‘crímenes hediondos’, los delitos de droga están sujetos a un mecanismo más represivo de cumplimiento de pena” (Chaparro, Pérez, & Youngers, 2017), tema constante en otros países.

Las condiciones anteriores permiten explicar, en parte, por qué la mayor parte de la población carcelaria latinoamericana se relaciona con delitos por drogas, sin que ello haya repercutido significativamente en la reducción de dicho delito.

La situación en el Ecuador

De acuerdo a los datos presentados en el gráfico No. 1, Ecuador es de los países con menor tasa de privados de libertad en la región, esto responde a importantes reformas ejecutadas desde 2007, sobre todo respecto a infraestructura, gestión de centros penitenciarios, resolución de causas represadas en el sistema judicial y reforma al Código Penal. Un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, ilustra la situación del país respecto a la población penitenciaria desde 2007 hasta la actualidad:

Las cifras de agosto del 2007 “(...) registran a 18.6750 prisioneros en 33 centros del país. Dos años después, en agosto de 2009 la Defensa Pública del Ecuador registró la fuerte disminución de 11.279 personas en prisión resultado de la Campaña gubernamental ‘Cero presos sin sentencia’ y el indulto a las denominadas mulas del narcotráfico

que dejó en libertad a 2.221 personas a nivel nacional”. (Navarrete, 2016).

Hasta allí, el nuevo modelo de gestión carcelario parecía dar buenos resultados. La elaboración del Código Orgánico Integral Penal permitió la tipificación diferenciada de delitos y asignación de penas máximas y mínimas en función de varios factores. Con relación al sistema judicial, se buscó procesar de manera ágil y adecuada más de un millón doscientas quince mil causas represadas (Asamblea Nacional, 2011); y en cuanto a los centros de rehabilitación social, se invirtió en la construcción de nuevos centros penitenciarios para resolver el hacinamiento de la población carcelaria, de esta manera, actualmente el país cuenta con 53 centros de rehabilitación operando (Navarrete, 2016).

Paradójicamente, a partir del 2013 se registra un aumento importante del número de personas privadas de libertad en el país. “En octubre del 2013 se (...) [registraron] 24.203 (...) para septiembre del 2014, se (...) [contó] con 26.821 personas internadas” (Navarrete, 2016). Según las mismas autoridades del Consejo de la Judicatura, este incremento se debe a la eficiencia en la administración de justicia y disminución de la impunidad, textualmente, Gustavo Jalkh, presidente del Consejo, señala:

“Un sistema penal más eficiente tiene el efecto de incrementar la población penitenciaria porque garantiza que no hay impunidad, y eso es lo que está sucediendo en el Ecuador donde existe incremento de la población carcelaria”. (Diario PP Digital, 2016).

Las declaraciones citadas demuestran que el sentido de las transformaciones en el ámbito carcelario sigue centrado en el paradigma punitivo, cuyo principal recurso es la cárcel. En el caso ecuatoriano esto ha sido reforzado con la creación de nuevos tipos penales, operaciones antidelitivas de gran magnitud y niveles de reincidencia. (Na-

varrete, 2016). Evidentemente, en los temas relacionados con drogas, el país sigue la tendencia generalizada del aumento de encarcelamientos a “actores menores” del negocio de narcotráfico, especialmente mujeres, pues el 43% de internas están encarceladas por delitos relacionados (Chaparro, Pérez, & Youngers, 2017, pág. 49). Esto resulta preocupante, pues, mientras la tendencia a criminalizar a eslabones “reemplazables” en el negocio del narcotráfico continúe, la problemática no será resuelta y el sistema penal propiciará un círculo vicioso que llevará constantemente a poblaciones vulnerables a insertarse en el ámbito delictual.

* Socióloga, investigadora Programa Democracia, Seguridad y Defensa.

Notas al pie

1. Los primeros días de 2017 en Brasil iniciaron con 17 horas de violencia. Miembros de un cartel del narcotráfico llamado Familia del Norte masacraron a miembros de su rival, Primer Comando de la Capital (PCC), una de las pandillas más grandes del país. Los asesinatos ocurrieron en el interior de una prisión de administración privada en la ciudad de Manaus, al norte del país. El episodio más mortífero de violencia en las cárceles de Brasil tuvo lugar en 1992, cuando 111 presos fueron asesinados en la prisión de Carandiru en São Paulo.
2. Práctica común en los años 90 en Colombia, que consistía en mantener en el anonimato a jueces y testigos (Diario Proceso, 2007)
3. Situación que apela a la existencia de una amenaza excepcional para suspender determinados derechos indispensables y ampliar la discrecionalidad policial. (Cantú, 2013)

Bibliografía

- Asamblea Nacional. (09 de septiembre de 2011). Más de 1.215.000 causas represadas son el más claro ejemplo de la catástrofe en el sistema judicial: María Alejandra Vicuña. Obtenido de Asamblea Nacional del Ecuador: http://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/mas_de_1215000_causas_represadas_son_el_mas_claro_ejemplo_de_la_catastrofe_en_el_sistema
- Cantú, S. (2013). El régimen penal de excepción para delincuencia organizada bajo el test de los derechos humanos. Archivos jurídicos UNAM, 1737- 1765.
- Chaparro, S., Pérez, C., & Youngers, C. (2017). Castigos irracionales: Leyes de drogas y encarcelamiento en América Latina. México: CEDE.
- Diario PP Digital. (10 de febrero de 2016). La eficiencia de la justicia incrementó número de presos. Diario PP Digital.
- Diario Proceso. (12 de febrero de 2007). Justicia sin rostro en Colombia: Amor y odio. Diario Proceso.
- Muggah, R., & Szabó de Carvalho, I. (6 de Enero de 2017). El mortífero sistema penitenciario de Brasil. The New York Times en Español.
- Navarrete, B. (2016). Informe 5 años del nuevo modelo carcelario. Quito.

ENTREVISTA EL FENÓMENO DEL FEMICIDIO Y SU TIPO PENAL

David Arcentales I.*

El delito de Femicidio entró en vigencia en el Ecuador junto con la aprobación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en Agosto de 2014. Desde entonces, el fenómeno ha sido visualizado con altos registros. En estas circunstancias, el Femicidio se muestra como un problema complejo que incumbe a toda la sociedad, por lo que el equipo del Programa Democracia, Seguridad y Defensa (P) entrevistó a la especialista Susy Garbay Mancheno (S.G) Magíster en Derechos Humanos, Docente principal de Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador.

P: ¿Cuál ha sido la incidencia del Femicidio desde que el delito fue tipificado?

S.G: Según el observatorio de la Comisión Ecuaménica de Derechos Humanos que se dedica a monitorear casos de femicidio, de enero a noviembre del año anterior se registraron 80 casos en 16 provincias del país, siendo Pichincha la provincia con mayor incidencia, seguida por Guayas, Manabí y el Oro. Lo

que llama la atención es que en 15 casos de los ochenta, el agresor se suicidó. Y hasta finales del 2016, de estos 80 casos, 6 tenían sentencia condenatoria. En este año, desde enero al primero de mayo, hay 55 casos de femicidio. La provincia con mayor incidencia ahora es Guayas, seguida de Pichincha, Manabí y los Ríos. El suicidio del agresor se presenta en 6 casos.

Previo a la tipificación, los casos de muerte de mujeres se sancionaban únicamente como homicidio o asesinato, lo que impedía evidenciar las situaciones de violencia de género que rodeaban a estos crímenes. Así, si una mujer moría en un asalto podía ser asesinato, pero el mismo tipo penal se utilizaba si era asesinada por el esposo luego de una historia de violencia. La Comisión de Transición hacia el Consejo de Igualdad, realizó una de las primeras investigaciones sobre este tema en cuatro provincias del país, para lo cual se revisaron procesos judiciales, estableciendo que de 170 procesos por muertes de mujeres, 77 constituían femicidio. Con esto se alertó sobre la dimensión de esta

problemática. También el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, hizo un estudio que va desde el 2009 al 2011, únicamente en Quito, determinando que de 93 casos de homicidios de mujeres, 38 eran femicidio, mientras que en 28 se sospechaba que lo era.

P: ¿Cuáles son las causas identificadas?

S.G: Los estudios demuestran que la mayor parte de los asesinatos son cometidos por el conviviente y por el ex conviviente, y las principales causas fueron los celos, la decisión de separarse tomada por la mujer, cuando la víctima inicia una nueva relación, o la resistencia de la víctima a tener relaciones sexuales. Ahora es más fácil establecer las características del delito porque ya contamos con el tipo penal y se pueden hacer registros, aunque estos todavía podrían ser imprecisos, puesto que algunos fiscales adecuan la conducta al tipo penal de asesinato, o de violación con muerte, cuando previamente la víctima ha sido agredida sexualmente.

P: ¿Cómo se dio el proceso para tipificar el femicidio?

S.G: El término feminicidio fue propuesto por Diana Russell, una feminista estadounidense, con la intención de caracterizar el asesinato de mujeres en contextos de violencia patriarcal. En América Latina existen casos paradigmáticos como el denominado Campo Algodonero en México, donde jóvenes mujeres fueron asesinadas, enterradas y luego descubiertas en fosas clandestinas. El hecho fue conocido y resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos crímenes sucedieron en la ciudad de Juárez, localizada en la frontera entre México y Estados Unidos. En esta región la presencia de la maquila conllevó la contratación de mano de obra femenina, alterando los tradicionales roles femeninos y masculinos. Las mujeres empezaron a ganar salarios que les permitió tener cierta independencia y poner en cuestionamiento el rol masculino. Sin duda, este caso impulsó a demandar, en otros países, una figura jurídica que visibilice y tenga un impacto político para denunciar la muerte de las mujeres en esos contextos patriarcales. Finalmente en el Ecuador se logró la tipificación del femicidio. La intención era visibilizar la responsabilidad del Estado en este tipo de muertes, dado que es el garante de prevenir la violencia. Es decir, en un contexto en el cual, según datos oficiales, 6 de cada 10 mujeres han sido violentadas, el Estado tiene la obligación de actuar. Sin embargo, las políticas públicas no pueden limitarse al aspecto punitivo, pues debe prevenir que estas muertes sucedan y para ello necesariamente se deben modificar los patrones culturales que promueven este tipo de violencia, pero el Estado no ha sido eficiente en este aspecto.

P: ¿Hay una diferencia entre femicidio y feminicidio?

S.G: El término feminicidio fue acuñado por la mexicana Marcela Lagarde, que buscaba representar el genocidio de mujeres, puesto que las condiciones históricas y los contextos han dado lugar a prácticas sociales que naturalizan la violencia contra las mujeres, que en numerosos casos provocan su muerte sistemática y no son casos aislados. Este concepto sirve para nombrar esos crímenes que se producen en el ámbito de una política sexual, es decir que no son

conductas cometidas por alguna patología sino que responden a toda una cultura patriarcal, por lo tanto el Estado tiene una responsabilidad en este fenómeno. Entonces, en el caso de México, se habla de feminicidio, pero aquí en el Ecuador, quizá por la reserva de visibilizar al Estado como el responsable de la muerte de mujeres, se optó en la Asamblea por el tipo penal de Femicidio. Pero en mi opinión el Estado sigue siendo responsable, porque, desde el ámbito jurídico, ha suscrito y ratificado varios instrumentos internacionales de derechos humanos, particularmente la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como Convención de Belém do Pará, por la cual se obliga a implementar políticas para modificar incluso los factores culturales que provocan la violencia contra las mujeres.

El tipo penal de femicidio en el Ecuador está formulado en los siguientes términos: “La persona que como resultado de las relaciones de poder, manifestada en cualquier tipo de violencia dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años”.

P: En ese sentido ¿cuál ha sido el debate de tipificar eso frente a mantenerlo como un homicidio o un homicidio agravado por ciertas circunstancias?

S.G: El tipo penal de asesinato tiene la misma sanción que el de femicidio, esto es 22 a 26 años de privación de libertad. Pero en el tipo penal de femicidio, se especifica que la muerte se da “por el hecho de ser mujer” o “por su condición de género”. Adicionalmente, se plantean circunstancias agravantes, por ejemplo, dice “haber pretendido establecer o reestablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima, que exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, relaciones laborales, escolares, o cualquier otra que implique confianza, subordinación, superioridad; si el delito se comete en presencia de hijos o hijas o cualquier otro miembro de la familia; si el cuerpo de la víctima es expuesto o arrojado a un lugar público”.

P: ¿Esta tipificación del delito, produjo cambios dentro del sistema jurídico?

S.G: En primer término visibiliza una conducta de violencia extrema hacia las mujeres, sin embargo, en opinión de algunos colegas penalistas en los casos concretos se presenta la dificultad de establecer la relación de poder y la intención de dar muerte a una mujer por el hecho de serlo. Estos elementos al configurar el tipo penal deben ser comprobados porque en materia penal no se puede hacer una interpretación. Entonces, tiene que demostrarse que esa muerte es el resultado de relaciones de poder que se hayan expresado en cualquier forma de violencia, y ahí cabe una pregunta: ¿qué es lo que se entiende por violencia para un juez, para un fiscal? ¿Un empujón, o tiene que llegar la víctima desangrada, tener una historia larga de violencia? Pensemos en el caso de una relación casual, supongamos que un hombre le pretende a una mujer, le ofrece llevar a la casa y él quiere mantener relaciones sexuales, ella se resiste y él la mata. Aquí la pregunta es -¿Si es femicidio o no?- Para algunos penalistas eso no sería femicidio porque no existe una historia de violencia previa. Sin embargo, esto sería descontextualizar tal circunstancia, porque un hecho así no está al margen de un contexto de poder en el cual hay un dominio masculino y una violencia simbólica que coloca a las mujeres en una situación de permanente desventaja.

P: ¿Es decir que siempre hay un problema de subjetividad al tratar los casos, tanto de abogados, fiscales, jueces?

S.G: Desde mi perspectiva, sí. En el derecho igual que en otras instituciones de poder, están presentes los imaginarios femeninos que se han construido a lo largo de la historia. Así, por ejemplo, suele justificarse la violencia contra las mujeres que se salen de los roles tradicionales, esto suele ser muy evidente en los casos de violencia sexual, en los que se cuestiona la actitud de las víctimas, inclusive responsabilizándolas por su forma de vestir o su conducta sexual previa. Si se observan los casos de femicidio, el hecho de que sean los celos la principal causa del asesinato, visibiliza ese sentido de propiedad del hombre frente al cuerpo de las mujeres. Cabe

recordar que hasta el año 1989 había un eximente penal en el Código Penal que establecía que no se sancionaba “al padre, hermano o abuelo que mate a la hija, hermana o nieta que haya sido encontrada en acto carnal ilegítimo” – entendiéndose por acto carnal ilegítimo, las relaciones sexuales que se mantenían fuera del matrimonio. Es decir, el derecho les ofrecía una licencia a los varones de la casa a matar a las mujeres del hogar. Igual que pasaba con la figura del adulterio, que ingresó a nuestro

derecho con la incipiente República, en 1837, y es una figura que sancionaba exclusivamente a las mujeres. Esta figura es una herencia del derecho romano, en el cual existía la figura del pater familias, quien tenía la potestad de castigar a las mujeres, a los hijos y a los sirvientes. Modernizado el derecho, esta figura ha sido trasladada al derecho ecuatoriano y en general al latinoamericano. En términos de Pierre Bourdieu, existe una ley social vigente, de tal forma que, a pesar de que se han extinguido estas

normas, socialmente siguen vigentes, porque es parte de la construcción cultural, del orden social patriarcal cuyas estructuras no han sido modificadas, y el derecho hace muy poco aporte para promover un cambio. Es así, que a pesar de la tipificación del femicidio, su efecto disuasivo no es el esperado, eso se evidencia en los datos de muertes de mujeres de los últimos años.

* Sociólogo, investigador del Programa Democracia, Seguridad y Defensa PUCE

CRONOLOGÍA DE NOTICIAS ENERO - ABRIL 2017

SEGURIDAD CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA

La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de la Policía Nacional del Ecuador resolvió hasta el 2016, un porcentaje del 60.1% de casos de muertes violentas: en el 2015 fue del 46%. Hasta el 24 de diciembre del 2016, esta instancia registró 932 muertes violentas, de las cuales 302 fueron resueltas dentro de las primeras horas de haber ocurrido. El director Nacional, coronel de Policía Víctor Arauz, manifestó que en el 2016, se detuvieron a 740 sospechosos. *Diario El Comercio*. 03/01/2017.

DELITOS SEXUALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. Se registraron 343 casos, según informe del comité técnico del convenio entre la Fiscalía, el Ministerio de Educación y la Judicatura ecuatoriana del 2012 al 2014: en el 2015 fueron 152 y en el 2016, con corte hasta julio, 33. Entre el 2003 y el 2010 hubo solo 63 denuncias. Y las edades de las víctimas van desde los 4 años, pero la mayor incidencia está entre los 15 y 17 años. *Diario El Comercio*. 11/02/2017. **DELITOS DE PORNOGRAFÍA INFANTIL.** La

Fiscalía ecuatoriana señala que en el 2016, se reportaron 114 denuncias relacionadas con delitos de pornografía en niños menores de 10 años: los agentes sostienen que las redes sociales son los canales más utilizados para transmitir pornografía infantil, pero también para engañar y chantajear a las víctimas. *Diario El Comercio*. 28/03/2017.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Agentes del Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional del Ecuador (DEVIF) advierten que en el 2016 se han presentado al menos cinco casos graves en que ex parejas atentan contra sus bienes (celulares, computadoras, útiles escolares, herramientas de trabajo y ropa): la encuesta del INEC del 2014, sobre relaciones familiares y violencia de género, detalló que la agresión patrimonial es el tercer tipo de violencia que el hombre ejerce en contra de la mujer. *Diario El Comercio*. 09/02/2017. **El Ministerio de Justicia del Ecuador dijo que durante las tres primeras semanas de enero de 2017 se registraron 14 femicidios que dejaron a 26 niños en la orfandad:** de enero a noviembre de 2016, la Comisión Ecuatoria de Derechos Humanos, registró 80 femicidios en 16 provincias. Pichincha

tuvo la mayor cantidad de casos con 16, seguido de Guayas con 14. En 15 de ellos, el responsable se suicidó. *Diario El Comercio*. 13/02/2017. **Entre las propuestas para enfrentar el femicidio están la de incluir a los autores de estos crímenes en la lista de los más buscados,** dar asistencia psicológica, de salud, educación y alimentación para los niños que quedan huérfanos por esta causa. *Diario El Universo*. 08/03/2017. **La Fiscalía y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNE) pondrán en funcionamiento la aplicación Junt@s CNT una herramienta digital que brinda asistencia inmediata a mujeres víctimas de violencia de género** que permitirá a la víctima “activar una alarma al verse ante el peligro de una agresión”. *Diario La Hora*. 27/03/2017.

Identificadas bandas de tráfico de personas que se llevan niños a países para ser explotados laboralmente: según Ivonne Daza, de la DINAPEN, ciudadanos extranjeros engañan a las familias de los menores ofreciéndoles dinero a cambio de que tramiten la autorización de salida. La mayoría de víctimas provienen de las provincias de Imbabura, Loja, Chimborazo, Cotopaxi, Guayas y Pichincha. *Diario El Comercio*. 26/02/2017. **Existen mafias relacio-**

nadas con la trata de personas, que traen a jóvenes, sobre todo colombianas, para ser explotadas sexualmente en el Ecuador: en el 2012 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), advirtió que la provincia de Sucumbíos era “una zona de origen, tránsito y destino de trata de personas”. En Puerto El Carmen las mujeres llegan en botes o carros y van acompañadas de hombres que las llevan a burdeles en Shushufindi, Cuyabeno, Coca y Lago Agrio. El fenómeno se agrava debido a que las víctimas no denuncian por miedo a las represalias. *Diario El Comercio*. 19/03/2017.

El sistema de inteligencia del gobierno ecuatoriano ha sido cuestionado en diferentes ocasiones: luego del ataque a Angostura (2008) el Gobierno ecuatoriano reorganizó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y creó la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) -de carácter civil-, por una supuesta infiltración de la CIA entre los entes militares y policiales que hacían esta tarea. El presidente Rafael Correa, posteriormente reconoció que la SENAIN falló durante la revuelta policial el 30 de septiembre de 2010. Así mismo el 15 de julio del 2015, legisladores de oposición pidieron a la SENAIN que aclare un posible espionaje a políticos ecuatorianos. La denuncia se conoció luego de que la empresa Hacking Team fuera ‘hackeada’ y se conociera una lista de usuarios de su programa de ciberespionaje; allí apareció Ecuador. *Diario El Comercio*. 23/03/2017.

La UNASUR ha creado reglamento para actuar contra delincuencia organizada: el Ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, informó que la Unión de Naciones Suramericanas ha avanzado en la creación de un reglamento contra la delincuencia organizada transnacio-

nal, en el marco de la IV reunión del Consejo Suramericano de Seguridad de ese organismo. Se busca establecer coordinadores nacionales que permitan el intercambio de información en tiempo real. *Diario El Comercio*. 29/03/2017.

TRÁFICO Y CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES

La Policía Nacional del Ecuador incautó en 2016 el récord de 110 toneladas de droga, principalmente cocaína, y desbarató 100 organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes, informó el Ministerio del Interior: de las 100 bandas desarticuladas, 81 se dedicaban al microtráfico, 13 al narcotráfico y seis al lavado de activos. *Diario El Comercio*. 03/01/2017. **La policía ecuatoriana informó que las bandas de microtráfico de droga están reclutando a consumidores para que vendan las cantidades de estupefaciente permitidas en la tabla de tenencia,** y en caso de ser detenidos den positivo en las pruebas que les certifican como consumidores y puedan ser liberados. *Diario El Comercio*. 23/02/2017.

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO (COIP). Se propone modificar el art. 220 que se refiere al tráfico de estupefacientes, adicionándole un inciso que prohíba la tenencia de drogas para uso o consumo en los espacios públicos: el incumplimiento de esta disposición será sancionado con cárcel que va de uno a tres años. La propuesta va encaminada para sancionar a aquellos expendedores que se hacen pasar por consumidores para no ser detenidos. *Diario El Comercio*. 20/02/2017. **El Centro Científico de la Secretaría de Drogas del Ecuador encontró que la droga H está compuesta básicamente por heroína, cafeína y diltiazem:** en el 2015, de las 7392 atenciones por

consumo de opiáceos (sustancias ilegales, como la H), el 89% se concentró en la denominada Zona 8, es decir, Guayaquil, Durán y Samborondón. La mayoría de los pacientes tenía menos de 18 años. En el 2016, el 67% de los adolescentes que llegó a centros de tratamiento ambulatorio en esas ciudades lo hizo por consumo de drogas como la H. *Diario El Comercio*. 22/03/2017.

Ecuador, uno de los principales lugares del mundo en blanqueo de dinero: Estados Unidos, en su informe anual del 2016 sobre el narcotráfico, señaló que el Ecuador es uno de los países por los que más drogas ilegales transitan de camino a América del Norte y Europa. *Diario El Comercio*. 02/03/2017. **El Gobierno de EE.UU. incluyó al Ecuador, en su lista de “principales lugares de blanqueo de dinero” en el mundo,** según su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros correspondiente a 2016. El reporte señala que el Ecuador es “altamente vulnerable” debido a “su economía dolarizada y estar ubicado entre dos grandes países productores de droga (Colombia y Perú)”. *Diario La Hora*. 02/03/2017.

CASOS DE PROTESTA SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

Desde el 14 de diciembre de 2016 rige el estado de excepción en Morona Santiago (Ecuador), tras el enfrentamiento entre indígenas shuar (algunos quedaron heridos) y autoridades, donde un policía perdió la vida en el campamento minero La Esperanza (cantón San Juan Bosco): la decisión de ampliar por 30 días más esta medida podría darse, informó el Ministerio del Interior en un comunicado. *Diario La Hora*. 06/01/2017. **El pedido del recurso de Habeas Corpus a favor de Agustín Wachapá, presidente de la Federación Interprovincial de**

Centros Shuar (Ficsh), fue negado: Wachapá fue detenido por el supuesto delito de instigación a la discordia por una publicación en la red social Facebook durante el enfrentamiento entre indígenas y la fuerza pública en el campamento minero La Esperanza. *Diario La Hora*. 06/01/2017.

El presidente Rafael Correa, mediante el decreto ejecutivo 1294, amplió por 30 días más el Estado de excepción para Morona Santiago, implementado desde el 14 de diciembre (2016): la ampliación se debe a los efectos de las agresiones a miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas en los cantones San Juan Bosco y Limón Indanza, generadas en diciembre de 2016 por parte de grupos ilegalmente armados, durante el intento de toma del campamento minero de la empresa china Nankints. *Diario La Hora*. 12/01/2017.

La audiencia de fundamentación del recurso de apelación que presentaron tres detenidos por los hechos violentos registrados en la parroquia San Carlos de Panantza, en Morona Santiago, se realizará el 13 de diciembre del 2017: los detenidos están acusados de homicidio y tentativa de asesinato por la muerte del policía José Mejía. *Diario El Comercio*. 12/01/2017.

Los jueces de la Corte de Justicia de Morona Santiago acogieron la apelación a la prisión preventiva que pesa en contra de los detenidos por el caso Panantza: con ello, Danny M., Milton R., Mercedes C., Ítalo C. y Braulio T. obtuvieron la libertad, pero los procesos judiciales continuarán. *Diario El Comercio*. 13/01/2017.

El Ministerio de Defensa de Ecuador exigió la liberación de dos soldados retenidos por indígenas de la nacionalidad shuar, en la comunidad amazónica de Yunkupais: el Ministerio precisó que los subtenientes Luis Rodríguez y Paúl Pazmiño, fueron abordados por los co-

muneros cuando acudieron a la zona de Yunkupais para rescatar a otros dos militares que habían sido retenidos por los indígenas, cuando transitaban por el lugar en un autobús en goce de días de descanso, sin uniforme y desarmados. La retención de Rodríguez y Pazmiño se habría producido luego que la comunidad Shuar de Yunkupais les exigiera su intercambio por los miembros de la tropa detenidos inicialmente. *Diario La Hora*. 22/01/2017.

Para el 24 de enero de 2017 se fechó la audiencia del recurso de hecho en el caso del líder Shuar, Tomás Jimpikit, declarado culpable por el delito de paralización de servicio público. *Diario El Comercio*. 23/01/2017.

El viernes 27 de enero de 2017, la radio de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh) perdió su señal: policías incautaron todos los equipos de la radio, asentada en Sucúa, sin ninguna explicación. Los dirigentes de la Ficsh creen que es una medida por haber transmitido un mensaje de su presidente, Agustín Wachapá, desde la cárcel de Latacunga. *Diario La Hora*. 27/01/2017.

El 28 de enero de 2017, fueron liberados los subtenientes del Ejército Luis Rodríguez y Paúl Pazmiño, retenidos por una comunidad Shuar del cantón Taisha. *Diario La Hora*. 28/01/2017.

El 22 de enero de 2017, el Ministerio de Defensa de Ecuador presentó una denuncia por el secuestro de dos subtenientes del ejército por parte de una comunidad Shuar del Cantón Taisha, sin embargo, la figura de la denuncia se cambió por la de secuestro extorsivo. *Diario El Comercio*. 30/01/2017.

Marcelo Dueñas, abogado del general (R) de la Policía Nacional del Ecuador, Édgar Vaca, dijo que Estados Unidos acogió el pedido de asilo para este exoficial que en Ecuador es investigado por delito

de lesa humanidad: Vaca pasó por el SIC-10, servicio policial que fue investigado por torturas. También estuvo al frente de la desaparecida Unidad de investigaciones Especiales (UIES). *Diario El Comercio*. 18/01/2017.

Falleció Édgar Vaca, procesado por delito de lesa humanidad: el excomandante era requerido por la justicia ecuatoriana debido a una investigación sobre la tortura y desaparición de 3 personas que formaban parte del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo. *Diario La Hora*. 31/01/2017.

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada pidió a Ecuador que adopte medidas para agilizar procesos judiciales por esos hechos en el periodo 1984-2008: en el informe el comité recomendó intensificar los esfuerzos para localizar a las personas desaparecidas de forma forzosa. Y garantizar la reparación integral de las víctimas. *Diario El Comercio*. 17/03/2017.

CÁRCELES Y SISTEMA JUDICIAL

Entre 10 mil y 12 mil presos sin sentencia condenatoria ejecutoria podrán participar de las elecciones que se desarrollarán en el Ecuador el 19 de febrero (2017): a ese acuerdo llegaron el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Ministerio de Justicia. Para ello, se arrancará una campaña de cedulação en las cárceles del país. La votación de los presos será receptada tres días antes de que acudan a las urnas el resto de los ciudadanos. En anteriores procesos el nivel de participación en las votaciones de los presos sin sentencia ha sido del 50%. *Diario La Hora*. 09/01/2017.

Los presos sin sentencia son los primeros en participar de la segunda vuelta electoral para elegir al nuevo Presidente del Ecuador. Según el viceministro

de Justicia, Andrés Tinajero, a escala nacional pueden votar unas 10 mil personas en los distintos centros de reclusión. *Diario La Hora*. 30/03/2017.

El presidente de la Judicatura ecuatoriana, Gustavo Jalkh, informó que en 2016, el sistema de justicia ecuatoriano resolvió 801.230 casos de todo tipo de materias, pese a que solo ingresaron 625.536 causas: es decir, existe una tasa de resolución de 1.28, lo que significa que se despacharon más causas de las que ingresaron. En lo que respecta al proceso de selección de jueces, 4.914, de un total de 7.582 postulantes, han pasado la primera fase del concurso que busca llenar 270 vacantes en las tres zonas judiciales del país. *Diario El Universo*. 11/01/2017.

El presidente Rafael Correa cuestionó la figura de cooperación eficaz, establecida en el art. 419 del Código Integral Penal, con la que los procesados pueden llegar a un acuerdo con la fiscalía, en el que den a conocer información precisa, verídica y comprobable para esclarecer un caso, a cambio de recibir una sentencia que está entre el 10% y el 20% de la pena mínima fijada para cada delito. Según el mandatario la disminución de la pena es sumamente alta y por eso envió un documento a la Asamblea para que se rectifique este error. *Diario El Comercio*. 05/03/2017.

POLICÍA NACIONAL- MINISTERIO DEL INTERIOR

Mediante decreto presidencial N° 1292, el presidente ecuatoriano Rafael Correa nombró como nuevo Ministro del Interior a Pedro Solines: Diego Fuentes, fue nombrado nuevamente como viceminis-

tro del interior. *Diario El Comercio*. 04/01/2017.

Mujeres en el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional. Johana Almeida y Joselyn García son las primeras mujeres comando en graduarse en El GOE: la promoción cuenta con 18 policías más. *Diario El Comercio*. 13/01/2017. **29 comandos del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional del Ecuador (GIR) se graduaron del XVII Curso Avanzado:** los alumnos cursaron nueve módulos que incluyeron técnicas policiales, uso progresivo de la fuerza, derechos humanos, tiro, rescate en alta media y baja montaña, supervivencia, entre otros. *Diario El Comercio*. 20/01/2017.

La Policía Nacional del Ecuador inauguró las nuevas instalaciones de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased): la Dinased plantea para el 2017 la resolución del 70% de casos de muertes violentas y mantener el 90% de resolución de casos de extorsiones. *Diario El Comercio*. 26/01/2017. **Delegaciones de mujeres policías de varios países latinoamericanos se reunieron en el “Seminario de procesos y aplicación de normativas internacionales y leyes nacionales en caso de tratos de personas”:** trataron temas como la aplicación de la normativa internacional en casos de trata de personas en el Ecuador; la política pública ante este delito; las buenas prácticas en la protección y atención integral de las víctimas y la captación de víctimas con fines de pornografía y explotación sexual. Ivonne Daza, directora de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes

(Dinapen) de Ecuador, destacó que en el año 2014, cuando el delito de trata de personas fue tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), se detectó que el 83 % de las víctimas son mujeres. *Diario El Comercio*. 08/03/2017.

DEFENSA-FUERZAS ARMADAS-MINISTERIO DE DEFENSA

El general Luis Castro fue cesado de sus funciones como Comandante del Ejército ecuatoriano: en su reemplazo el presidente Rafael Correa, nombró al general Carlos Egüez, mediante decreto ejecutivo firmado el 5 de marzo de 2017; sin embargo, por medio del decreto ejecutivo 1334, firmado el 6 de marzo, finalmente nombró como jefe del ejército al general Edison Narváez. *Diario El Comercio*. 06/03/2017. **El ministro de defensa, Ricardo Patiño, señaló que la Ley Orgánica de la Defensa Nacional establece que el Ejecutivo es el que designa al jefe del Comando Conjunto mediante terna, y que no es por la cadena que le toca a alguien:** “Se le presenta una terna [al presidente] de quienes están en el primer lugar, el presidente decide y elige a uno de ellos; pero si considera que él puede tener más confianza en las personas que están en la siguiente terna no es que lo destituye, lo cesa de sus funciones que es muy distinto”. Para el exjefe de Estado Mayor del Ejército Wagner Bravo, estos cambios resultan dudosos porque pese a que es potestad del presidente escoger al comandante general entre los tres primeros de la terna, “en cierta forma se vuelve ilegal” al eliminar a tres oficiales de división y escoger a una segunda terna. La misma Constitución determina que todo acto administrativo debe ser debidamente motivado, “y

los decretos 1333 y 1334 no indican por qué se le remueve al general Castro, ni por qué se le nombra al general Narváez; entonces, da la duda de por qué se eliminan cuatro generales de división”, puntualizó Bravo. *Diario El Universo*. 08/03/2017.

El ex jefe del ejército ecuatoriano, general Luis Castro, instó a los ecuatorianos a que “exijan todas las garantías” a las nuevas autoridades del Ejército “para que su voto sea respetado”: Castro sostuvo que las Fuerzas Armadas son “garantes” de los comicios, por lo que antes de dejar su cargo le pidió al jefe del Comando Conjunto “que proceda a mantener la cadena de custodia total de todo el proceso”. Señaló que eso no se cumplió en las elecciones del 19 de febrero 2017, pues los militares, al momento de contar los votos, fueron relegados a mantenerse en los exteriores. Además, cuestionó que ese mismo día, antes de que concluyera la jornada, el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, se anticipara a dar resultados preliminares de las elecciones. Por ese motivo, manifestó que el Consejo de Generales se vio obligado horas después a sacar

un manifiesto pidiendo que se respete la institucionalidad democrática y reveló que él decidió acudir a la oficina del presidente, Rafael Correa, a presentar su cargo a disposición el martes 21 de febrero 2017. *Diario La Hora*. 06/03/2017. **El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, en relación a la declaraciones del ex jefe del ejército Luis Castro, dijo que el General, está desinformado, que sus declaraciones son “confusas e imprecisas”:** advirtió que en ningún momento la autoridad electoral recibió ninguna alerta de las Fuerzas Armadas sobre una supuesta ruptura de la cadena de custodia. *Diario El Comercio*. 07/03/2017.

Discriminación racial en la Escuela Superior Militar-ESMIL: Michael Arce, ex cadete, quien fue víctima de discriminación racial al interior de la institución en el año 2013, presentó una demanda contra el Estado por responsabilidad objetiva. Según Andrés Castillo, abogado de Arce, el Estado no protegió los derechos del joven y por ello se cometió en contra de él el delito de odio racial. *Diario El Comercio*. 28/03/2017.

RELACIONES ECUADOR-COLOMBIA

Diálogo entre gobierno colombiano y el ELN: ante el reciente anuncio de la reanudación del diálogo entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN en la ciudad de Quito (Ecuador), el equipo de negociación aclaró que las conversaciones seguirán siendo exploratorias en cuanto el grupo terrorista no cumpla con liberar al ex congresista Odín Sánchez. *Diario El Comercio*. 09/01/2017. **Los representantes del Gobierno Colombiano y del Ejército de Liberación Nacional (ELN),** trataron en Quito, entre otras cosas, el tema de indultos y asuntos técnicos. *Diario El Comercio*. 16/01/2017.

V Gabinete Binacional entre los presidentes de Ecuador, Rafael Correa y Colombia, Juan Manuel Santos se llevó a cabo el 15 de febrero 2017: el acuerdo final planteó seis ejes: seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos, asuntos ambientales, asuntos sociales y culturales, asuntos económicos y comerciales. *Diario El Comercio*. 15/02/2017



Pontificia Universidad
Católica del Ecuador

Comité Editorial:

- Bertha García Gallegos
- Francisco Rhon Dávila
- Juan Pablo Aguilar
- Marco Romero Cevallos

Asesoramiento Internacional:

- Dr. Gustavo Suárez Pertierra – UNED (España)
- Dr. Louis Goodman – American University (USA)
- Dra. Sonia Alda - Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado - España

Investigadores:

- David Arcentales I.
- Cristina Chuquimarca M.
- Laura Calderón

Programa Democracia, Seguridad y Defensa

Dirección: Av. 12 de Octubre y Patria. Universidad Católica. Torre 2, piso 9, oficina 901.
Teléfonos: (593-2) 299 1041 / (593-2) 299 1700 ext. 1474 / 1041

e-mail: bgarcia@puce.edu.ec

Correspondencia y solicitud de ejemplares: programa.dsd.puce@gmail.com
www.programadspuce.host56.com

